



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Reparación Directa –incidente de liquidación de perjuicios
Demandante: Alfonso López Pineda
Demandado: Nación - Rama Judicial
Radicación: 15001-33-33-004-2013-00134-00

El Despacho procede a resolver el incidente de condena en abstracto presentado por la parte demandante, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

En sentencia de 27 de noviembre de 2015, medio de control reparación directa, proferida por este Juzgado, se dispuso lo siguiente:

“(…)

PRIMERO.- DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la NACIÓN- RAMA JUDICIAL por el error jurisdiccional en que incurrió el Tribunal Administrativo de Casanare, que actuó en Descongestión del Tribunal Administrativo de Boyacá, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de Agosto de 2007 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Dere4cho No.2002-0999.

SEGUNDO.-Como consecuencia de la anterior declaración, **CONDENAR** a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a favor del señor ALFONSO LÓPEZ PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.766.021, la suma que acredite en el incidente que se promueva dentro del término previsto en la ley, conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.”(fls.201, cdo.No.2)

El Despacho consideró que la reparación de los perjuicios morales materiales del demandante debía consistir en: “el pago de la suma de dinero equivalente a lo que dejó de percibir el señor Alfonso López Pineda como consecuencia del reintegro sin solución de continuidad que debió efectuarse..., es decir el pago de aquellos salarios prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha en

que el señor Alfonso López Pineda fue retirado del servicio y hasta la fecha de ejecutoria de segunda instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 2002-0999 adelantado por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja”

Asimismo, dispuso que las sumas que resulten a favor del demandante debían ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, mes a mes, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, teniéndose como índice inicial el momento la acusación de cada una de ellas, y que las sumas reconocidas deberán ser indexadas a la fecha del auto que resuelva el incidente.

Finalmente, estableció que se deberían liquidar y pagar los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social del demandante, por el mismo período (fl. 199 cdo No. 2)

Además de lo anterior, este Juzgado indicó que para establecer la cuantía de la condena, se debía acreditar dentro del trámite incidental, los siguientes documentos:

- Certificado donde conste la fecha exacta de retiro del servicio del señor Alfonso López Pineda.
- Constancia de ejecutoria de la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2002-0999.
- Certificación donde conste cuáles eran los salarios y prestaciones asignados para el cargo de citador municipal código 5335 grado 04, en el municipio de Cómbita, entre la fecha de retiro del servicio y la fecha de ejecutoria de la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2002-0999. (fls. 199 cuaderno No.2)

La descrita decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia 13 de junio de 2017 (fls.226 – 236 cdo. No. 2), y el Despacho profirió auto de obedecer y cumplir el 06 de julio de 2017 (fl. 240 Cdo. 2).

El apoderado de la parte actora promovió trámite incidental con el propósito de que se efectuó la liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con lo ordenado en la sentencia que se acaba de describir, para lo cual presentó la siguiente liquidación:

(...)

CONSOLIDACIÓN GENERAL

SALARIOS	87.109.269
----------	------------

LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	6.663.898
INTERESES A LA CESANTÍAS	794.538
LIQUIDACIÓN VACACIONES	3.331.949
PRIMA DE SERVICIOS	6.663.898
PRIMA DE VACACIONES	3.331.949
TOTAL GENERAL	107.895.502

(...)

Con fundamento en lo anterior solicitó que se tenga como liquidación en concreto de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de (\$107.895.502), y aportó las siguientes pruebas:

- Copia del derecho de petición con constancia de recibido, en el que solicitó ante el municipio de Cóbbita constancia de retiro del servicio público, certificados salariales y valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social. (fl. 10-11)
- Oficio de fecha 16 de junio de 2017 No. AMCE 232-17, suscrito por la Auxiliar Administrativo del municipio de Cóbbita. (fl. 12)
- Certificado de salarios devengado por el demandante, expedida por la Secretaría de Gobierno municipal de Cóbbita. (fl. 13)

Además, la designación de un perito experto para que rinda dictamen, consistente en liquidar el lucro cesante, en los términos ordenados en la sentencia.

TRÁMITE

El apoderado del accionante presentó el 14 de septiembre de 2017, el memorial contentivo del incidente de regulación de perjuicios (fl. 1), por tanto, se promovió dentro de los 60 días siguientes al auto de obediencia al superior, tal como lo establece el inciso 2º del artículo 193 del CPACA.

De la solicitud de incidente se corrió traslado por 3 días, según lo establecido por el artículo 129 del CGP (fl. 18), término en el cual la parte incidentada no se pronunció.

Previo a resolver el incidente, mediante auto de 6 de noviembre de 2012 (fl. 20-21 y vto. Cuaderno de incidente), este Juzgado negó la prueba pericial solicitada, y ordenó lo pertinente a fin de recaudar los documentos señalados en la sentencia (fl. 20 cdo incidente); sin embargo, ante la extinción del cargo que desempeñaba el accionante —citador municipal grado 5325 grado 2—, y la inexistencia de un cargo equivalente en la planta de personal del municipio de Cóbbita, fue necesaria la solicitud de otras pruebas documentales indispensables para resolver el incidente propuesto (fl 46 y 54).

CONSIDERACIONES

Del incidente de condena en abstracto

El artículo 193 del CPACA prevé que cuando la condena se profiera en abstracto, el interesado promoverá incidente dentro del dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al Superior, escrito que deberá contener la liquidación motivada y especificada de su cuantía. De igual modo, establece que vencido en término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea, decisión que es susceptible de recurso de apelación.

A su turno, el artículo 210 *ibídem* establece las siguientes reglas:

- “1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.*
- 2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas en caso de ser necesarias.*
- 3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la audiencia siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea posible su decisión en la misma.*
- 4. Cuando los incidentes sean de aquellos que se promueven después de proferida la sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo resolverá previa la práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos podrá citar a una audiencia especial para resolverlo, si lo considera procedente...”*

Con fundamento en lo anterior, el Despacho se pronunciará respecto al incidente de liquidación de condena promovido por la parte demandante.

Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial

Según el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República expedir las normas que establezcan los objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Por su parte, el numeral 6º del artículo 313 *ibídem* establece como función de los concejos municipales, la siguiente:

- “6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; **las escalas de remuneración correspondientes a las***

distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.”

Adicionalmente, el numeral 7º del artículo 315 atribuye a los alcaldes:

*“7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, **señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes**. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.”*

Ahora, en desarrollo de dispuesto en el artículo 150 superior, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992, en cuyo artículo 12 dispuso:

“ARTÍCULO 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.”¹

De acuerdo con la constitución y la ley, es viable inferir que en la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel territorial, intervienen distintas autoridades. Justamente, corresponde al Congreso de la República a través de una ley marco, establecer las directrices con que el Gobierno ha de regular esta materia –Ley 4ª de 1992- y al presidente de la República, dentro del marco dispuesto por el legislador, fijarlo mediante decreto.

A su vez, en el ámbito del régimen salarial, corresponde a las entidades territoriales fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos, mientras que en materia prestacional no guardan ninguna competencia por disposición expresa del inciso final del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, que reza:

“Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas.”

En ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-1218 de 2001, al sostener:

“La definición del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos en general, resulta del ejercicio de una competencia que corresponde, en primer

¹ Artículo declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-315 de 1995 de “... siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales...”

lugar, al Congreso de la República y al Presidente de la República dentro del marco trazado por aquél (CP, art. 150-19, lit e) y f). Efectivamente, según dicha atribución, el Congreso, a través de una ley marco o cuadro, fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse una determinada materia, entre las cuales se encuentra la relativa al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales- lo que en la actualidad se concreta en la Ley 4ª de 1992 (Ley marco de salarios y prestaciones sociales).

(...) En el caso de la vigencia de las leyes marco o cuadro, el Presidente de la República, al dictar los correspondientes decretos ejecutivos que las completan, participa activamente en la determinación normativa de las materias que constituyen su objeto, dentro del marco normativo general, compuesto de reglas o directrices, que como se ha dicho, el Congreso le establece, lo cual converge en una trascendente y coordinada labor normativa ejercida en forma conjunta por dos poderes públicos estatales.

(...)

En lo relativo al ámbito territorial, cabe destacar que la facultad de fijar el régimen de salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al Presidente de la República, en la forma ya enunciada. A partir de esa fijación, procede la intervención de los concejos municipales y las asambleas departamentales, por mandato de los artículos 313-6 y 300-7 superiores, respectivamente, y en forma complementaria, con el fin de adoptar en esas secciones del territorio la política de salarios.

Efectivamente, con base en el máximo salarial previamente delimitado por el gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores señalan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, en lo que se ha denominado un proceso de definición armónica entre las distintas autoridades que intervienen en el mismo. En cambio, respecto del régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos territoriales, la competencia es indelegable en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas, por expresa prohibición constitucional.”²

De conformidad con lo expuesto, la liquidación de los salarios del señor Alfonso López Pineda se efectuará conforme al aumento año a año certificado por el municipio de Cóbbita. Con relación a las prestaciones sociales, las mismas se liquidarán de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978 “Por medio del cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestación es sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.”.

Ahora bien, pese a que el citado decreto se encuentra dirigido a los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional, el artículo 1º del Decreto 1919 de

² .M.P. Alvaro Tafur Galvis

2002³ hizo extensivo el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los empleados del nivel territorial, vinculados o que se vincularan, dando lugar a la aplicabilidad del Decreto 1045 de 1978 al presente asunto.

Es del caso precisar, que en el periodo a liquidar comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2002, aun no había entrado en vigencia el Decreto 1919 de 2002, puesto que ello ocurrió el 1 de septiembre de 2002, no obstante, las prestaciones del demandante se liquidarán conforme al Decreto 1045 de 1978, en razón a que no había norma especial que regulara las prestaciones sociales de los empleados territoriales.

CASO CONCRETO

En el asunto bajo estudio, se acreditaron los siguientes aspectos:

- El accionante fue retirado del cargo como citador código 5325 grado 4 del municipio de Combita, el 31 de diciembre de 2001 (fl. 31).
- La sentencia de segunda instancia dictada el 15 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2002-00999, seguida por el demandante Alfonso López Pineda frente al municipio de Cómbita, cobró ejecutoria el día 26 de octubre de 2011 (fl. 40).
- En la actual planta de personal del municipio de Cómbita no existe el cargo de citador municipal código 5325 grado 4 u otro equivalente (fl. 43, 50)
- De acuerdo con la certificación obrante a folio 44 del expediente, el accionante durante el año 2001 devengó asignación básica correspondiente a trescientos un mil doscientos treinta pesos (\$301.230) y prima de navidad por la misma suma.
- Según la certificación visible a folio 50, además de los anteriores conceptos percibió prima de vacaciones.
- El 01 de abril de 2012, el municipio de Cómbita le reconoció al señor Alfonso López Pineda la suma de tres millones ciento once mil doscientos veintiún pesos (\$3.111.221) por concepto de cesantías definitivas (fl. 111).

³ ARTÍCULO 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidas.

- El día 22 de febrero de 2002, el accionante recibió trescientos un mil doscientos treinta pesos (\$ 301.230) a título de indemnización de vacaciones (fl.122).
- Se allegó copia del Decreto 011 de 2001 de 11 de abril de 2001, Decreto 051 de 2001 de 31 de diciembre de 2001, Decreto 054 de 20 de diciembre de 2004, Decreto 010 de 26 de marzo de 2007, Decreto 045 de 5 de junio de 2008, Decreto 037 de 26 de mayo de 2010 y Decreto 024 de 14 de abril de 2011, mediante los cuales se establecen los emolumentos para la planta de personal del municipio de Cóbbita (fl.62 a 62 y 71 a 85).
- El municipio de Cóbbita certificó los porcentajes que anualmente sirvieron para el incremento de la asignación salarial mensual de los empleados del nivel asistencial (fl. 91), así:

Año	Porcentaje de incremento
2001	8,75
2002	13,11
2003	7,39
2004	7,35
2005	7,00
2006	6,99
2007	7,05
2008	7,07
2009	9,97
2010	5,00
2011	5,00

De acuerdo con lo acreditado en expediente, las acreencias laborales a favor del accionante se liquidaron desde el 01 de enero de 2002, -día siguiente al retiro definitivo del servicio-, y hasta el 26 de octubre de 2011, -fecha de ejecutoria de la sentencia proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2002-00999-, por los siguientes conceptos:

- **Salarios**

Para determinar el monto a pagar por concepto de salarios, se partió de la asignación básica percibida por el actor en el año 2001, esto es trecientos un mil doscientos treinta pesos (\$301.230), y se aplicaron los porcentajes de incrementos establecidos por el municipio de Cóbbita para los cargos de nivel asistencial, determinando la asignación básica que debió percibir en cada uno de los años a liquidar, así:

Año	Incremento salarial	Salario
2001		\$301.230
2002	13,11%	\$340.721
2003	7,39%	\$365.901
2004	7,35%	\$392.794
2005	7%	\$420.290
2006	6,99%	\$449.668
2007	7,05%	\$481.370
2008	7,07%	\$515.403
2009	9,97%	\$566.788
2010	5%	\$595.128
2011	5%	\$624.884

Luego, se establecieron las sumas percibidas mensualmente después de realizar los correspondientes descuentos correspondientes a salud y pensión, valores que, conforme a lo ordenado en la sentencia se indexaron teniendo como índice inicial aquel vigente a la fecha en que se causaron, es decir, el certificado por el DANE para el mes inmediatamente anterior, y como índice final el vigente para la fecha de expedición de la presente providencia, esto es, el correspondiente al mes de abril de la presente anualidad, obteniendo de acuerdo con la liquidación anexa, los siguientes valores para cada uno de los años:

TOTAL SALARIOS	
AÑO	SALARIOS
2002	\$7.997.415
2003	\$8.013.027
2004	\$8.098.137
2005	\$8.226.365
2006	\$8.427.038
2007	\$8.555.973
2008	\$8.567.614
2009	\$8.997.510
2010	\$9.246.578
2011	\$7.843.934
TOTAL	\$83.973.592

Entonces, por concepto de salarios se adeuda al señor Alfonso López Pineda la suma de ochenta y tres millones novecientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos (\$83.973.592).

- Prestaciones sociales.

Se liquidarán las prestaciones sociales debidamente certificadas por el municipio de Cóbbita, estas son: i) vacaciones, ii) prima de vacaciones iii) prima de navidad y iv) cesantías.

No se probó que el demandante hubiese devengado auxilio de transporte, prima de servicios o intereses sobre las cesantías, por tanto, estas prestaciones no serán incluidas en la liquidación.

Ahora bien, como se indicó en precedencia, el monto de las prestaciones se determinó con base en las reglas establecidas en el Decreto 1045 de 1978 *“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.”*.

i) Vacaciones y prima de vacaciones.

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 8 y 24 del citado Decreto, las vacaciones corresponden a quince (15) días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicios, y la prima de navidad es equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio.

Asimismo, conforme al artículo 17 *ibídem*, para liquidar el descanso remunerado por concepto de vacaciones y la prima de vacaciones, únicamente se tuvo en cuenta la asignación básica, pues el accionante no devengó otros factores que pudiesen incluirse.

ii) Prima de navidad.

De acuerdo con lo dispuesto a lo establecido en el artículo 33 del Decreto 1045 de 1978, para el reconocimiento y pago de la prima de navidad se incluyeron la asignación básica y una doceava (1/12) de la prima de vacaciones, pues, se itera fueron los únicos factores certificados.

iii) Auxilio de cesantías

El artículo 45 *ibídem* establece los factores de salario para la liquidación de la cesantía, de los cuales únicamente es posible incluir la asignación mensual, y las doceavas correspondientes a las primas de navidad y vacaciones.

De acuerdo con las anteriores precisiones, por concepto de prestaciones sociales, se obtuvieron, debidamente indexadas, las sumas que a continuación se relacionan:

CUADRO RESUMEN PRESTACIONES					
Año	Prima vacaciones	Vacaciones	Prima navidad	Cesantías	Total Año
2002	\$350.073	\$350.073	\$729.318	\$837.328	\$2.266.791
2003	\$354.233	\$354.233	\$737.985	\$837.295	\$2.283.746
2004	\$359.342	\$359.342	\$748.628	\$846.461	\$2.313.772
2005	\$365.850	\$365.850	\$762.187	\$859.062	\$2.352.948
2006	\$375.236	\$375.236	\$781.742	\$879.000	\$2.411.215
2007	\$381.067	\$381.067	\$793.889	\$898.629	\$2.454.652
2008	\$378.732	\$378.732	\$789.025	\$907.725	\$2.454.214
2009	\$406.855	\$406.855	\$847.615	\$931.370	\$2.592.695
2010	\$417.217	\$417.217	\$869.201	\$957.828	\$2.661.463
2011	\$352.657	\$352.657	\$729.388	\$755.443	\$2.190.145
TOTAL	\$3.741.260	\$3.741.260	\$7.788.978	\$8.710.140	\$23.981.640

Por tanto, el accionante tiene derecho al pago de veintitrés millones novecientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta pesos (\$23.981.640).

Por consiguiente, la Rama Judicial deberá pagar al señor Alfonso López Pineda la suma de ciento siete millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos (\$107.955.232), a título de perjuicios materiales, de acuerdo a lo establecido en la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de junio de 2017.

Finalmente, los valores correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del accionante, deberán ser liquidados y pagados por la entidad demandada, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2002 y el 26 de octubre de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Liquidar la condena proferida en abstracto por este Juzgado en sentencia de veintisiete (27) de noviembre de 2015, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de junio de 2017, a favor del señor Alfonso López Medina contra la Nación-Rama Judicial, a título de perjuicio material en la suma de ciento siete millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos (\$107.955.232).

SEGUNDO.- Ordenar a la Nación-Rama Judicial liquidar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Integral del señor Alfonso López Pineda, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2002 y el 26 de octubre de 2011.

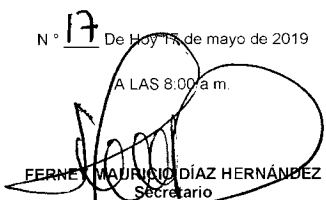
TERCERO.- Esta providencia deberá cumplirse dentro de los términos y formas establecidos en el artículo 192 del CPACA.

CUARTO.- Una vez en firme la presente providencia, por Secretaría **practicar** la liquidación de costas fijadas en primera instancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ

Juez

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>N.º <u>17</u> De Hoy 17 de mayo de 2019</p> <p>A LAS 8:00 a.m.</p> <p> FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario</p>

⁴CZ/CQ

⁴ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 11 de abril de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario